



Junta General
del Principado de Asturias

XII LEGISLATURA SESIÓN DEL PLENO NÚMERO 64 (27 de mayo de 2026)

ASUNTO NÚMERO 16

Moción del Grupo Parlamentario Vox subsiguiente a la interpelación urgente de su diputado don Gonzalo Centeno Martín al consejero de Ciencia, Industria y Empleo en materia de minería y, en concreto, sobre el perjuicio económico que se está causando tanto a empresas como a los trabajadores del sector cuyas labores estaban amparadas por los proyectos de investigación complementaria y que ahora están en suspenso por la incertidumbre jurídica que caracteriza al uso de esta figura (12/0183/0065/24013)

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 19 de mayo de 2026. La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, serie B, número 669, de 20 de mayo de 2026).

El Grupo Parlamentario Vox, a través de su portavoz, Carolina López Fernández, al amparo del artículo 204.2 RJG, y en relación con la interpelación urgente en materia de minería y, en concreto, sobre el perjuicio económico que se está causando tanto a empresas como a los trabajadores del sector cuyas labores estaban amparadas por los proyectos de investigación complementaria y que ahora están en suspenso por la incertidumbre jurídica que caracteriza al uso de esta figura, formula la siguiente

MOCIÓN

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a:

Primero. Iniciar los trámites para declarar la caducidad de los derechos mineros de Mina Miura por incumplimientos graves de la concesionaria como paso previo a la convocatoria de un concurso público para su adjudicación a un nuevo operador que garantice el mantenimiento del empleo y el respeto a la normativa vigente.

Segundo. Declarar, conforme a los artículos 33 y 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el carácter de urgente y preferente del despacho de todas las solicitudes y trámites relativos a las minas de carbón del suroccidente de Asturias, con especial atención a TYC Narcea (Vega de Rengos), para evitar la destrucción de empleo y permitir la rápida reincorporación de sus trabajadores.

Tercero. Requerir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y al Instituto para la Transición Justa (ITJ) para que agilicen todos los procedimientos pendientes en relación con las explotaciones mineras del suroccidente de Asturias.

Cuarto. Instar al MITERD y al ITJ para que desarrollen, en colaboración con el Principado de Asturias, una interpretación general y conjunta de la Decisión del Consejo 2010/787/UE y la Ley 7/2021 que ponga fin a la inseguridad jurídica y aclare los supuestos de aplicación con



Junta General del Principado de Asturias

objetividad, concreción y sencillez para evitar que la discrecionalidad derive en arbitrariedad. En cualquier caso, se suspenderá cualquier exigencia de devolución de ayudas hasta que se garantice el mantenimiento del empleo o la reincorporación laboral efectiva de los trabajadores afectados.

Quinto. Diseñar e implantar, en colaboración con el ITJ, un plan específico que dé prioridad a los mineros afectados por la suspensión de actividades amparadas en proyectos de investigación complementarios (PIC) y garantice que no vuelvan a quedar excluidos de los fondos de recuperación. Estos programas, entre otros aspectos, deberán incluir:

1. Incentivos a la contratación que premien a las empresas que contraten a estos trabajadores con bonificaciones y deducciones.
2. Criterios preferenciales para que la incorporación de los mineros afectados y su experiencia laboral sea valorada positivamente en licitaciones, análisis de solvencia y viabilidad técnica para la concesión de autorizaciones mineras.
3. Planes específicos de recolocación, formación y autoempleo en proyectos de diversificación económica financiados con fondos del ITJ y sometidos a estrictos mecanismos de control, auditoría e información pública que garanticen su destino efectivo a los trabajadores afectados. Como garantía adicional, se establecerá la incompatibilidad para participar en su gestión, ejecución o intermediación a cualquier organización o entidad condenada por fraude de subvenciones u otros delitos de corrupción, así como a aquellas que pertenezcan a estructuras, federaciones o grupos vinculados a entidades condenadas por tales delitos.

Palacio de la Junta General, 15 de mayo de 2026. Carolina López Fernández, portavoz.